



Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1987/27/Add.1
24 de diciembre de 1986

ESPAÑOL
Original: INGLÉS/RUSO

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
43° período de sesiones
Tema 16 del programa provisional

APLICACION DE LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESION Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID

Opiniones e informaciones transmitidas por los Estados Partes
con arreglo a la resolución 1986/7 de la Comisión

Nota del Secretario General

INDICE

| | <u>Página</u> |
|---|---------------|
| RESPUESTAS RECIBIDAS DE LOS ESTADOS PARTES | |
| Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas..... | 2 |

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

[Original: ruso]
[15 de diciembre de 1986]

La comunidad mundial, guiándose por los principios de democracia y humanitarismo establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, considera como uno de sus objetivos prioritarios la eliminación del régimen racista de Sudáfrica, basado en la política criminal del apartheid.

Sin embargo, y pese a la creciente indignación de todas las personas honradas, el apartheid sigue existiendo. Es más, no deja de aumentar el número de víctimas del terror y la represión con que los racistas de Pretoria se esfuerzan por sofocar las manifestaciones de la población sudafricana para exigir el respeto de sus derechos humanos fundamentales.

La causa principal de que el régimen racista de Sudáfrica siga aplicando su criminal política de apartheid, agresión y ocupación estriba en que, a pesar de las múltiples resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas al respecto, dicho régimen goza del apoyo directo de influentes protectores occidentales que, abierta o veladamente, impiden la adopción de sanciones universalmente obligatorias en esa esfera. Por diversos medios, entre los que se cuentan las empresas transnacionales, tales países mantienen de hecho -e incluso consolidan- sus relaciones con el régimen de Pretoria en los ámbitos militar, político, financiero y económico. Conviene tener en cuenta que estas actividades hacen caso omiso del llamamiento lanzado por las Naciones Unidas a los países en que las empresas transnacionales mantienen su sede para que adopten medidas efectivas orientadas a poner fin a toda colaboración de sus empresas con el régimen racista minoritario de Sudáfrica.

Según a datos correspondientes a 1985, en ese año ejercían actividades en Sudáfrica 1.068 empresas transnacionales, de las cuales 406 eran de los Estados Unidos de América, 364 del Reino Unido, 142 de la República Federal de Alemania, 32 de Suiza, 24 de Australia, 21 del Canadá, 20 de Francia, 18 de Suecia, 17 de los Países Bajos, 7 de Italia, 6 de Bélgica, 3 de Dinamarca, 2 de Austria, y uno de cada uno de los siguientes países: España, Portugal, Noruega, Finlandia, Malasia y Hong Kong. Las empresas transnacionales operan prácticamente en todos los sectores de la economía sudafricana, y en algunas ramas de la industria, entre ellas la petrolera, desempeñan un papel rector, ayudando al régimen de apartheid a soslayar el embargo impuesto al suministro de petróleo.

En el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre las actividades de las empresas transnacionales en Sudáfrica (E/C.10/AC.4/1985/3) se muestra con datos concretos la contribución masiva de las empresas transnacionales al mantenimiento del régimen de apartheid. Sin embargo, ni siquiera esos datos dan una visión total del papel que desempeñan las empresas transnacionales en Sudáfrica, toda vez que tales empresas suministran grandes cantidades de tecnología en el marco de acuerdos de concesión de licencias, proporcionan productos industriales y equipo tecnológico altamente perfeccionado y participan activamente en el comercio exterior sudafricano.

La comunidad mundial y las Naciones Unidas saben cuáles son los países principalmente responsables del mantenimiento del régimen racista y el sistema

de apartheid en Sudáfrica. En su resolución 36/172 D, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó el mantenimiento por parte de algunos países occidentales y otros Estados, en particular los Estados Unidos, el Reino Unido, la República Federal de Alemania e Israel, de una colaboración económica y de otra índole con el régimen racista de Sudáfrica. Asimismo, en su resolución 38/39 A la Asamblea General condenó la política de ciertos Estados occidentales, en particular de los Estados Unidos de América e Israel, y de sus empresas transnacionales e instituciones financieras, que habían intensificado su colaboración en las esferas política, económica y militar con el régimen racista minoritario de Sudáfrica.

Si bien se ha producido una ligera disminución de las inversiones privadas directas y del número de empresas que ejercen sus actividades en Sudáfrica, la responsabilidad del mantenimiento del sistema de apartheid incumbe particularmente a las empresas transnacionales de los Estados Unidos. Sólo el acrecentado factor de riesgo, y de ningún modo el reconocimiento de su responsabilidad, ha motivado la decisión adoptada a fines de 1986 por la General Motors y la IBM de vender sus empresas sitas en Sudáfrica. Con todo, la intensificación de la batalla librada en el país contra el apartheid y la inestabilidad económica y política del régimen racista incitan a las empresas transnacionales estadounidenses no tanto a abandonar Sudáfrica como a desplegar esfuerzos orientados a afianzar su control de la evolución de la situación interna a fin de perpetuar el sistema vigente. El grupo Rockefeller, íntimamente vinculado a la Anglo-American Corporation of South Africa, que controla la industria minera de Sudáfrica, constituye un ejemplo palpable de la comunidad de intereses de los grandes grupos monopolistas estadounidenses y sudafricanos. Sin oponerse a los cambios superficiales realizados en Sudáfrica y favoreciendo el abandono del país por sus competidores, las empresas transnacionales estadounidenses de mayor envergadura tratan de implantar un modus vivendi en el que la criminal política de rapiña que practican en Sudáfrica presente una imagen exterior decorosa.

Una tercera parte de las empresas transnacionales que cuentan con sucursales en Sudáfrica tienen su sede en el Reino Unido, país que ocupa el primer lugar en cuanto al volumen de inversiones extranjeras en la economía sudafricana. La cuantía de tales inversiones ascendía en marzo de 1985 a cerca de 8.000 millones de dólares, es decir, aproximadamente a la mitad de las inversiones directas de capital extranjero. Si a ello se añaden las inversiones "de cartera", se alcanza la suma de 14.000 millones de dólares. En noviembre de 1984 el 10% aproximadamente del volumen total de las inversiones extranjeras del Reino Unido correspondía a Sudáfrica. La cuarta parte de las sedes de empresas transnacionales que mantienen vínculos directos con Sudáfrica se encuentran situadas en la República Federal de Alemania. Según datos del Fondo Monetario Internacional, el valor de las exportaciones de Sudáfrica a la República Federal de Alemania ascendió en 1984 a 676 millones de dólares y las importaciones a 2.300 millones de dólares. En ese mismo año, Sudáfrica exportó al Japón mercancías por valor de 1.300 millones de dólares e importó por valor de 1.900 millones de dólares.

En total, más del 90% de las inversiones extranjeras en Sudáfrica proceden del Reino Unido, los Estados Unidos, la República Federal de Alemania, Francia y Suiza, en tanto que el país depende del capital extranjero en un 20%. Y no es menor la función que desempeñan el suministro de petróleo y la transferencia de tecnología por conducto de las empresas transnacionales.

Con respecto a la responsabilidad que incumbe a las empresas transnacionales en el mantenimiento del régimen de apartheid, no puede dejar de mencionarse que el comercio con los denominados "países de reciente industrialización" comienza a desempeñar un papel cada vez más importante en la economía de Sudáfrica, y huelga decir que las empresas transnacionales mantienen bajo su control tanto la economía como la vida política de tales países (Israel, la República de Corea, Taiwán).

Causan particular inquietud las actividades de las empresas transnacionales en el sector militar de la economía sudafricana, ya que constituyen una grave amenaza para la paz y la seguridad de la región y del mundo entero. Es decisiva la importancia que revisten las actividades de las empresas transnacionales en el ámbito del desarrollo de la energía nuclear en Sudáfrica, toda vez que contribuyen materialmente a que Pretoria consiga el arma nuclear. Tales empresas son en gran medida responsables de que Sudáfrica haya dejado de ser país importador de armamentos para convertirse en país exportador.

Además de fortalecer el régimen de apartheid en los ámbitos económico y estratégico militar, las empresas transnacionales contribuyen en gran medida al afianzamiento del régimen racista dentro de Sudáfrica al identificarse políticamente con el Gobierno del país. De conformidad con la legislación vigente, las empresas transnacionales cuentan en Sudáfrica con importantes unidades privadas de policía que se pueden utilizar para la represión de las manifestaciones populares.

Las empresas transnacionales siguen pagando su sueldo a los empleados que cumplen el servicio militar, financiando de ese modo la maquinaria represiva del régimen de apartheid.

Un ejemplo característico de la velada complicidad entre las empresas transnacionales y los medios mercantiles de occidente y el régimen criminal del apartheid es que, en lugar de las leyes sobre salvoconductos y el control de la afluencia de la población negra a las ciudades, el Gobierno sudafricano recurre en la actualidad a los criterios de disponer de trabajo y vivienda con esos mismos fines racistas.

De ese modo, las empresas transnacionales, que prestan un apoyo activo al apartheid en los ámbitos económico y político, comparten plenamente con las autoridades sudafricanas la responsabilidad del mantenimiento de ese régimen. Los monopolios imperialistas, que con el apoyo o la indulgencia de sus países de base explotan rapazmente los recursos humanos y naturales del Africa meridional, son cómplices directos e inmediatos del régimen criminal de Pretoria. De ahí que quepa considerar la política de las empresas transnacionales que colaboran con Sudáfrica como un conjunto de actividades que incurren en responsabilidad penal internacional con arreglo al artículo 2 de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (inciso b)).

Los intereses financieros y políticos de las empresas transnacionales y sus países de origen entorpecen por todos los medios el examen emprendido por las Naciones Unidas para determinar el nivel de complicidad de tales empresas y países con el crimen de apartheid. Precisamente esas naciones impiden la elaboración en el seno de la Organización de un código de conducta de las empresas transnacionales orientado a controlar eficazmente la actividad de éstas, inclusive en el Africa meridional.

En el informe sobre las empresas transnacionales en Sudáfrica y Namibia (E/CN.10/1985/9) elaborado por la Secretaría de las Naciones Unidas para el 11° período ordinario de sesiones de la Comisión de Empresas Transnacionales se dice sin ambages que algunos países de base de empresas transnacionales no se consideran obligados a cumplir las diversas resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas relativas a la adopción de medidas respecto de las empresas transnacionales que ejercen sus actividades en Sudáfrica.

Los representantes de esas empresas se negaron a participar en audiencias públicas sobre las actividades de las empresas transnacionales en Sudáfrica y Namibia (Nueva York, septiembre de 1985), lo que no cabe considerar sino como una prueba más de su desprecio por la opinión claramente expresada por las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados, la Organización de la Unidad Africana y toda la comunidad internacional, que exigen que se ponga fin inmediatamente y para siempre al apartheid.

Las alegaciones que hacen los países de base de empresas transnacionales sobre su supuesta incapacidad de controlar la actividad de tales empresas carecen totalmente de fundamento. De los hechos se deduce claramente que, cuando ello conviene a la línea política del gobierno del país de base, las empresas transnacionales pueden mantener un control sobre la actividad de sus filiales, sin tener en cuenta el principio de la "libre empresa" ni sus obligaciones contractuales o de otra índole.

De conformidad con los principios fundamentales en que se basa la política exterior de la Unión Soviética, uno de los cuales es el apoyo a los pueblos oprimidos que luchan por su derecho a la libre determinación, la independencia, la libertad nacional y el progreso social, la URSS cumple estricta y rigurosamente las resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas referentes al régimen de apartheid de Sudáfrica, y, por otra parte, no es país originario ni receptor de empresas transnacionales.

La URSS no mantiene ningún tipo de relación con Sudáfrica, ya sea ésta de índole diplomática, económica, comercial o militar, ni permite la reexportación de sus mercancías a dicho país.

La Unión Soviética es partidaria de que las Naciones Unidas celebren audiencias públicas sobre la actividad de las empresas transnacionales en Sudáfrica y Namibia para conferir un nuevo impulso a los esfuerzos desplegados por la comunidad internacional para poner fin cabalmente y sin demora al régimen inhumano de Pretoria y dar al traste definitivamente con los esfuerzos desplegados por las empresas transnacionales y sus países de base para protegerlo.

La URSS participó en el seminario organizado conjuntamente por el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Gobierno del Camerún en relación con la asistencia y el apoyo internacionales a los pueblos y los movimientos que luchan contra el colonialismo, el racismo, la discriminación racial y el apartheid (Yaundé, abril-mayo de 1986), en el que se recomendó a los Estados cuyas empresas transnacionales seguían manteniendo vínculos comerciales con Sudáfrica que examinaran la posibilidad de adoptar medidas

pertinentes para poner fin a las actividades de dichas empresas en Sudáfrica y Namibia. El Seminario recomendó asimismo a todos los Estados que examinaran la posibilidad de adoptar leyes pertinentes para la imposición de sanciones a las personas y organizaciones que mantuvieran relaciones con Sudáfrica.

De acuerdo con su posición de principio, la Unión Soviética apoya activamente los esfuerzos de las Naciones Unidas para erradicar definitivamente el colonialismo, el racismo y el apartheid, y, en sus propias actividades, se atiene rigurosamente a las decisiones adoptadas por la Organización.
